

gar esa aprehension, tuvieron lugar en los límites del Estado de Coahuila. De conformidad con lo pedido por el C. Fiscal se decreta: Que el Juez de Distrito de Coahuila es el competente para seguir conociendo del contrabando de siete barras plata y sus incidentes criminales á que se refiere esta competencia.

Remítanse las actuaciones al Juez de Distrito de Coahuila con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: remítase copia igual al de Nuevo Leon para su conocimiento.

Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landá,* secretario

Es copia. México, Junio 8 de 1875.—*Alejo M. Gomez Ugarte,* Oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Juan Somellera y Ca, contra un cobro que les hace el Administrador de la Aduana terrestre de Mazatlan.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice.

Los Señores Juan Somellera y Compañía fundan su queja de amparo en las frs. I y III del art. 1º de la ley de amparo de 20 de Enero de 1869, porque creen que el C. Administrador al cobrarles en virtud de las leyes del Estado de 12 de Mayo de

1873 y 18 del mismo mes del corriente año, ha violado las garantías que conceden los arts. 16 y 27 de la Constitución federal, á la vez que por la expedición de esas mismas leyes se invaden las facultades del Congreso de la Union, sin cuyo consentimiento no se pueden imponer contribuciones por los Estados sobre importaciones ó exportaciones conforme al art. 112 de la Constitución, frac. I.

El Promotor fiscal encuentra fundadas en derecho las razones que alegan los reclamantes, y como esta cuestion ha sido ya diversas veces resuelta por la Suprema Corte de Justicia en varios juicios semejantes, cree que en el presente caso procede tambien el amparo que piden los Señores Juan Somellera y Compañía.

El Ciudadano Administrador de la Aduana repite sin embargo en su informe, que cree derogados en favor de los Estados los arts. 19 y 33 del Arancel de Aduanas, vigente por la frac. I del art. único, de la ley de 31 de Mayo de 1872, á pesar de que esos arts. del Arancel fueron derogados unicamente, segun el contesto de la ley, solo en beneficio del Distrito federal y de la California; y sin que por esta resolucion se quebrante de ninguna manera el art. 28 de la Constitución, como sin fundamento infiere el C. Administrador terrestre.

Por todo lo expuesto y refiriéndose el fiscal á las diversas solicitudes de amparo que han sido despachadas favorablemente por ejecutorias de la Suprema Corte, y que no cita por no tenerlas á la vista, pero que existen en el archivo del Juzgado; concluye pidiendo que se sirva declarar, que la Justicia de la Union, ampara y protege á los Señores Somellera y Compañía, contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana Terrestre, por los cobros á que se refiere este juicio.

Mazatlan, Diciembre 7 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Diciembre 29 de 1874.

Visto esté juicio de amparo promovido por los Señores Juan Somellera y Compañía de este comercio, contra el cobro que les hace el C. Administrador de la Aduana Terrestre, ejercitando la facultad económica coactiva, de la cantidad de cuatrocientos setenta y siete pesos por derechos de consumo, adicional y contribucion federal, por cincuenta y siete bultos de mercancías nacionalizadas en Guaymas que introdujeron á este Puerto el 19 de Diciembre último, en el pailebot nacional Flora, alegando, que con tal procedimiento se violan en su persona las garantías otorgadas en los arts. 16 y 27 de la Constitución, y que las leyes del Estado de 23 de Mayo del año próximo pasado y 12 de Mayo del corriente, en que se apoya el cobro, son anticonstitucionales, por estar prohibido á los Estados, gravar las importaciones: Visto el informe del C. Administrador, en que reconoce como cierto el hecho de los quejosos, con la diferencia de tres centavos menos en la cantidad cobrada: lo alegado por el C. Promotor fiscal, y todo lo demas que de autos consta y ver convino, y

Considerando: que el seis por ciento de consumo calculado sobre las cuotas de importacion, y el veinte por ciento adicional que se cobra á los quejosos, son un recargo ó derecho impuesto á la misma importacion, y que la Legislatura del Estado de Sinaloa no tuvo para decretarlo, la licencia que exige la frac. 1ª del art. 12 de la Constitución. Con fundamento de los arts. 16, 27 y 101, fracs. 1ª y 3ª del mismo Código, se resuelve:

Que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Juan Somellera y Compañía contra el cobro que les hace el C. Administrador de la Aduana Terrestre, de la cantidad de cuatrocientos setenta y seis pesos noventa y siete centavos, á título de derecho de consumo, adicional y con-

tribucion federal, por cincuenta y siete bultos de mercancías extranjeras, que recibieron en el Pailebot nacional "Flora" el 19 de Noviembre último.

Hágase saber; remítanse las copias respectivas al periódico de esta Ciudad y al Semanario Judicial y los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales.

El Ciudadano Lic. Jesus María Gaxiola Juez interino de Distrito de Sinaloa, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó. Doy fé.—*Jesus María Gaxiola*.—*Francisco Medina*, secretario:

Es copia. Mazatlan, Enero 5 1875.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 14 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Señores Juan Somellera y Compañía, contra el cobro que les hace el Administrador de la Aduana Terrestre de Mazatlan, de la cantidad de cuatrocientos setenta y siete pesos, por derechos causados por la introduccion á dicho puerto de cincuenta y siete bultos de mercancías extranjeras, procedentes de Guaymas, cuyo cobro, segun manifiestan los quejosos, es improcedente, por ser contrario á la prohibicion que contiene el art. 112 frac. 1ª de la Constitución federal, y por consiguiente, atentatoria á las garantías que consignan los arts. 16 y 27 del mismo Código: Visto el informe de la autoridad; el paracer fiscal, el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sinaloa en 29 de Diciembre del año pasado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Juan Somellera y Compañía, contra el cobro que les hace el C. Admi-

nistrador de la Aduana Terrestre, de la cantidad de cuatrocientos setenta y seis pesos noventa y siete centavos, á título de derecho de consumo, adicional y contribucion federal, por cincuenta y siete bultos de mercancías extranjeras que recibieron en el Pailebot nacional "Flora" el 19 de Noviembre último.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los C. C. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—C. C. Presidente.—*José María Iglesias.*—Ministros.—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

Es copia que certifico. México, Agosto 14 de 1875.—*Enrique Landa.*

COMPETENCIA

Suscitada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon al Alcalde 1º de Villa de Marín, para conocer de la causa que se está instruyendo á Ireneo Benavides, por los delitos de asalto, robo y homicidio perpetrado en la persona del súbdito americano, Sanders.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte.

El Fiscal interino dice: que el Juez de Distrito del Estado de Nuevo Leon inició competencia al Alcalde 1º de Marín, para que se inhibiera de conocer en la causa que se había instruido contra Ireneo Benavides

por la muerte del súbdito americano Sanders. El Alcalde de Marín, sostuvo su jurisdicción, y por haber insistido en la suya el Juez de Distrito, ambos remitieron sus actuaciones á esta 1ª Sala, á fin de que ella declarara quien era competente.

El hecho que dió causa á esta competencia fué el siguiente: Algunos auxiliares del contra-resguardo, entre los cuales estaba Benavides, intentaron registrar una carretela en que iba Sanders, por tenerse sospechas de que en ella se conducía una suma de dinero que se trataba de exportar sin los requisitos legales. Sin que consten en los autos todas las circunstancias que mediaron al querer registrar la mencionada carretela, sí aparece, que en el encuentro resultó muerto Sanders. Juzgados conforme á la ley de salteadores y plagiarios los auxiliares que pretendieron registrar la carretela, fueron condenados á muerte por el Alcalde de Marín los que se aprehendieron, siendo uno de ellos Ireneo Benavides. Fundado en este hecho el Juez de Distrito, cree ser el único competente para conocer en la causa, en virtud de que siendo Benavides empleado de Hacienda, solo á la justicia federal tocaba juzgarlo conforme á la fracción 8ª del art. 24 de la ley de 14 de Febrero de 1826. El Alcalde de Marín, á su vez, sostiene su jurisdicción apoyado en que, habiendo sido un verdadero asalto el que se ejecutó al matar á Sanders, conforme á la ley de salteadores y plagiarios solo á él le corresponde el conocimiento. El Promotor fiscal agrega otra razón, y consiste en que habiéndose fallado por el Alcalde de Marín, y habiendo su sentencia causado ejecutoria, no tenía ya objeto la competencia, puesto que ya no podía impedirse que conociera de lo que realmente había conocido. Apesar de esta razón, el Juez de Distrito insistió en sostener su jurisdicción, fundándose en que no estando consumado el hecho, defendía su jurisdicción para la ejecución de la sentencia. Dos de los compañeros de Benavides, fueron juzgados por el Alcalde de Marín,